

EDITORIAL

Parece existir la idea generalizada respecto a que El Salvador viene experimentando desde 1979, la crisis más profunda y prolongada de toda su historia contemporánea. A los costos sociales y los miles de muertos ocasionados por el conflicto, se agregan las dimensiones económicas del mismo: el PIB de 1983 a precios constantes, se encuentra en niveles similares de hace diez años; el nivel de producción y consumo per cápita del país ha retrocedido casi veinte años y, los volúmenes de inversión implican retrocesos probablemente mayores a los veinte años. Sin embargo, algunos sectores del actual gobierno demócrata-cristiano han comenzado a cultivar ilusiones, aseverando que lo peor de la crisis ya pasó y que, si se toman las previsiones necesarias, la economía podría revertir su tendencia depresiva, creciendo la producción nacional a tasas sustanciales a partir de 1984 y 1985. Paralelamente al mayor crecimiento económico, se esperaría un mejoramiento en las condiciones sociales de la población en general y, probablemente, una mejoría sustancial en las condiciones de vida de los sectores populares.

Algunas de las principales fuentes de este optimismo económico son el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Planificación y la misma Presidencia de la República, a través de las opiniones vertidas por el Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos. A manera de ejemplo, el Comisionado Presidencial estima un crecimiento del 25.0% del PIB entre 1984 y 1988, de manera tal que, en sólo cuatro años, se esperaría recuperar los niveles de producción, ingreso, empleo y consumo prevalecientes en 1978.

La base para este optimismo oficial parece residir en dos puntos claves: primero, la suposición o esperanza de que la guerra habrá de concluir abruptamente o, en el peor de los casos, desaparecer gradualmente; y, segundo, que el paquete de políticas económicas concebido por el Gobierno y la Democracia Cristiana, cuente con el respaldo y apoyo no sólo verbal, sino también financiero, de los países "amigos" y las instituciones financieras internacionales.

¿En qué consiste la estrategia económica del Gobierno del Ing. Duar-

te? Desde un punto de vista teórico, la política económica que se quiere implementar tiene cierto grado de coherencia y lógica y es consistente con los esfuerzos de la DC por consolidar y ampliar sus bases de apoyo social. Su núcleo central consiste en una serie de medidas que tratarían de estimular la demanda y expandir las exportaciones, priorizando la reactivación de la producción, el empleo y el consumo y, —aunque reconoce la importancia del equilibrio en la balanza de pagos y en las cuentas del sector público— pospone para un futuro no determinado, la adopción de medidas concretas que establezcan el equilibrio en la economía nacional. Obviamente, una política económica tal como la planteada, necesita de donativos y préstamos internacionales que le posibiliten al país y al gobierno, gastar más de lo que sus debilitados y raquíticos ingresos le permiten.

La Democracia Cristiana parece haber creído que el gobierno de Ronald Reagan era lo suficientemente amigo como para financiar su proyecto de reactivación económica y ampliación de bases sociales. Concretamente, se esperaba que Estados Unidos proporcionara directamente o, se preocupara por respaldar, las gestiones ante Organismos Internacionales para obtener recursos por valor de más de ₡ 1,229 millones para cubrir los déficits en balanza de pagos durante 1984 y 1985. Cantidades similares de apoyo se esperaban en el mismo periodo para cubrir los déficits del sector público y los costos de la guerra no expresados en el presupuesto nacional.

Sobre estas bases, la DC y el actual gobierno proyectaban un crecimiento real del 2.0% en la producción nacional y del 5.5% en las importaciones para 1984. El incremento en la oferta global habría de permitir un crecimiento de casi 4.0% en el consumo de las familias salvadoreñas y del 3.0% en el consumo público. También se esperaba lograr en 1984 un crecimiento de 7.2% en la formación de activos fijos por parte de la empresa privada y del 8.1% en las exportaciones. Gracias al supuesto apoyo externo, los desequilibrios no generarían presiones inflacionarias de gran envergadura.

Para 1985, los estimados presentarían una situación aún más halagadora, con crecimiento en la producción nacional superiores al 5.0%; el consumo con incrementos mayores al 8.0% y, la inversión, aumentando a la sorprendente tasa del 37.0%.

Sin embargo, las esperanzas iniciales del gobierno demócrata-cristiano parecen desvanecerse frente a dos duras y tercas realidades: la guerra y la política norteamericana.

A pesar de los altibajos en las acciones bélicas y la aparente normalidad en algunas zonas del territorio nacional, la guerra continúa con una dinámica similar al periodo 81-83. El conflicto bélico evoluciona en un patrón de equilibrios dinámicos que abre y cierra con igual rapidez las perspectivas de una victoria militar tanto a la Fuerza Armada como a las fuerzas insurgentes del FMLN. Lo único seguro en esta dinámica es la espiral creciente de violencia, destrucción y tensionamiento de la sociedad salvadoreña y su aparato productivo. Continúan en 1984, al igual que en años anteriores, las tendencias al deterioro en la producción, al estrangulamiento fi-

nanciero interno y externo, al incremento en los riesgos e incertidumbres percibidos por la empresa privada. Continúan también, las tendencias al desplazamiento de población, al deterioro en las condiciones de vida y al incremento en los costos directos e indirectos de la guerra.

La estrategia de reactivación económica y de consolidación y ampliación de las bases sociales se ha estrellado también, contra un proyecto político norteamericano para El Salvador que prioriza la estabilidad en la balanza de pagos y en el presupuesto del sector público; el mantenimiento de tasas bajas de inflación; y, el fortalecimiento de la empresa privada salvadoreña, especialmente del gran capital, resentido y perjudicado por los intentos reformistas de los años pasados. Según la visión norteamericana, si se logra la estabilidad financiera y sobre todo, la cooperación del capital salvadoreño, se alcanzaría con mayor o menor rapidez, la recuperación económica basada en el empuje del sector privado

En este sentido, las medidas de política económica que la Administración Reagan y concretamente la AID creen que el país necesitan son las siguientes:

- La implementación gradual de diversas medidas que restablezcan el equilibrio en la balanza de pagos, priorizando el ajuste en la tasa de cambio. En esta línea debe también promoverse una mayor rentabilidad de las actividades de exportación básica, transfiriendo gradualmente al mercado paralelo todas las exportaciones de camarón, de algodón y del 25.0% de café. A un relativo corto plazo este proceso de transferencias al mercado paralelo debe culminar con una devaluación sustancial o alternativamente con un proceso de minidevaluaciones;
- El mantenimiento de la disciplina fiscal por parte del sector público y en especial del Gobierno Central. El significado de esta recomendación se hace patente con la sugerencia concreta de que se incrementen las tarifas de los servicios públicos y que se eleven los cobros en los hospitales y centros de salud que conforman el sistema de salud pública;
- La negociación de un acuerdo o entendimiento de "stand-by" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proporcionaría recursos complementarios a los de AID y permitiría obtener préstamos de la banca privada y renegociar la deuda vigente de El Salvador;
- El restablecimiento de la confianza del sector privado, fundamentalmente, a través de la agilización de los pagos por compensación de la Reforma Agraria, la definición clara de los objetivos y políticas gubernamentales, la liberalización de las importaciones, la mayor disponibilidad y agilidad en la asignación de divisas, la renegociación de las deudas de la empresa privada con el sistema financiero, y la utilización de bonos de la Reforma Agraria para adquirir empresas actualmente en poder del Estado;
- La aceptación del planteamiento de política económica confeccionado por EUA y el cumplimiento de ciertas metas concretas por el gobierno salvadoreño, haría que se apoyara financieramente los desequilibrios en la balanza de pagos y en el presupuesto nacional.

Por presión, por persuasión u otros motivos, el Gobierno de Reagan ha logrado hacer prevalecer su visión y sus recomendaciones. Con la sola excepción de la devaluación, el Gobierno de El Salvador y el BCR han adoptado íntegramente el paquete norteamericano. Aunque formalmente se sostiene el discurso de la reactivación, en la práctica, se sigue una política que prioriza la estabilización económica. A pesar de algunos pequeños proyectos de generación de empleo y estimulación de la demanda por parte del sector público, la visión dominante ha pasado a ser la norteamericana se-

gún la cual, el Gobierno sólo puede y debe jugar, un papel pasivo, limitado a estimular, facilitar y permitir las actividades de la empresa privada.

De acuerdo a esta ortodoxia económica impuesta, la reactivación sólo podrá lograrse por el empuje de la empresa privada que responderá positivamente al llamado de la patria y de sus intereses inmediatos de ganancia, resolviendo así, los problemas socio-económicos de la nación entera. En la práctica, las medidas impuestas por Washington significan, si no, el suicidio político, por lo menos, el debilitamiento de la relativa autonomía de gestión con que gozó los primeros días de gobierno, la Democracia Cristiana. Aparte de las implicaciones políticas para el gobierno y la Democracia Cristiana, la adopción del paquete norteamericano de política económica, habrá de significar un mayor deterioro de la producción nacional y de las condiciones de vida de la población salvadoreña, especialmente de los sectores de mayor pobreza; todo lo cual, le agregará mayor combustible al conflicto nacional.

Ante esta crítica situación, creemos nuevamente necesario repetir que, lo que el país necesita es la búsqueda de salidas y soluciones políticas al conflicto que desangra al pueblo y amenaza con destruir al país entero. Obviamente, lo anterior sólo es lograble a través del diálogo y, dada la complejidad de la problemática salvadoreña, a través de una política de distensión a nivel regional. La estabilización, la reactivación y la reconstrucción de las bases económicas que permitan el funcionamiento de la democracia en el país, son pensables como viables, únicamente dentro del marco de los entendimientos que pudieran lograrse como resultado de un diálogo de todas las partes en conflicto.

En este marco, habría un papel que jugar para cada una de las fuerzas involucradas. Concretamente, las fuerzas insurgentes tendrían que contribuir constructivamente a la solución de la problemática nacional aportando creativamente al diseño de políticas alternativas. Por su parte, la empresa privada puede y debe jugar un papel muy importante. Sin embargo, tiene que comprender que la reconstrucción nacional no significa únicamente rehacer lo destruido. Por el contrario, hay que buscar una serie de arreglos políticos y económicos que hagan factible la distribución equitativa de los costos y los beneficios del crecimiento económico, lo que ciertamente sugiere la necesidad de redefinición de nuevos horizontes de sentido por parte de la empresa privada.

Este marco de cooperación y sacrificio mutuo, que conduzca a un diálogo constructivo, es lo que necesita el país. Pero aún en el contexto de que tal arreglo no se de, y que la guerra continúe, hay que redefinir la política económica del gobierno. No se puede seguir en el camino de la guerra sin distribuir equitativamente los costos del conflicto.

Crecen cada vez más las cartas y las denuncias públicas que hablan de que sobre los sectores populares recaen los costos reales de la guerra. Estos sectores son los únicos que parecen ser obligados a engrosar las filas del ejército y que cargan con los costos económicos del conflicto.

Así, no sólo debe pensarse el diseño de un sistema de conscripción

militar no discriminatorio. Debe también repensarse toda la estrategia financiera. Hay que diseñar políticas que enfrenten los elevados y crecientes déficits del sector público y de la balanza de pagos. —ambos en última instancia relacionados con los gastos de la guerra—. a través de medidas tales como: la elevación de impuestos directos, especialmente los que recaen sobre ingresos no provenientes de salarios; sobre los ingresos de las grandes sociedades anónimas; y sobre el patrimonio (impuesto de vitalidad). Además, debería de pensarse en una nueva política de asignación de las divisas que obligara a los "patriotas" salvadoreños, como dijera el Embajador Pickering, a que repatriaran sus capitales de Miami, Nassau o tal vez de las Islas Gran Caimán.

De adoptarse medidas de tal envergadura, probablemente se estaría generando un clima de mayor receptibilidad y permeabilidad en aquellos sectores que solamente ven la guerra desde lejos, pero que son los que más de cerca se oponen a cualquier intento de diálogo y solución política tendientes a ponerle fin al conflicto que desangra a nuestro país.

San Salvador, septiembre de 1984.